

PANORAMA

Número 5

EDITOR RESPONSABLE: Alejandro Reyes

REDACCIÓN: Olga Lucía González

DIAGRAMACIÓN: FEPA

Contenido:

COYUNTURA:

- CAPTURAS Y ENTREGAS
- PIEDRA EN EL ZAPATO
- TENSAS RELACIONES
- PROCESO 8000
- LOS IMPLICADOS POR LA FISCALÍA
- PENALIZADO EL BLANQUEO DE CAPITALES
- DIFÍCIL SUSTITUCIÓN

NOTICIAS:

- CONVENIO CON LA UNIÓN EUROPEA
- USOS TERAPÉUTICOS DE LA AMAPOLA

CIFRAS

- CONSUMIDORES DE DROGAS EN ESTADOS UNIDOS EN 1993 Y MUERTES RELACIONADAS CON ÉSTAS

CAPTURAS Y ENTREGAS

En un contexto en el que las relaciones con Estados Unidos no han mejorado sustancialmente, las capturas y entregas de los grandes capos de Cali suponen nuevos retos para el gobierno.

L

a captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, producida el 9 de junio pasado, fue tan sólo el inicio del desmantelamiento de la cúpula del cartel de Cali en un lapso de un mes. En efecto, el 13 de junio se entregó Tulio Murcillo, testaferro del cartel (su hermano Luis Fernando, también sindicado por las autoridades, ya se había entregado en mayo); el 20 del mismo mes se entregó Henry Loaiza, jefe del ala militar del cartel, conocido como *El Alacrán*; 5 días después se entregó Víctor Patiño F., ex policía, sexto hombre del cartel según las autoridades; el 5 de julio, a su vez, fue capturado José Santacruz, tercer hombre de la organización, vinculado al asesinato del gobernador de Antioquia en 1989; el 8 fue capturado Julián Murcillo, testaferro, y al día siguiente, un mes después de la captura de Gilberto Rodríguez, se entregó Phanor Arizabaleta, socio de Helmer Herrera -prófugo- y quinto hombre del cartel. Con esto, sólo dos hombres de la cúpula restan por capturar -y es muy probable que así suceda en poco tiempo- para desarticular a la organización del Valle: son ellos Helmer Herrera y Miguel Rodríguez.

La pregunta natural es saber cómo, después de varios años tras las

huellas de los capos de Cali, en un lapso tan corto se produjeron estas entregas y capturas. En la respuesta a este interrogante confluyen factores de política externa y de política interna: por un lado, tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, la responsabilidad del tráfico de drogas recayó íntegramente en el cartel de Cali: según la DEA, en 1995 éste controlaba las tres cuartas partes de la oferta mundial de cocaína. Este punto quedó evidenciado con la certificación condicionada que otorgó el gobierno norteamericano al gobierno colombiano en marzo pasado, y se resaltó aún más con los resultados de la visita de Robert Gelbard (subsecretario antinarcóticos) a Colombia. Además, en plena campaña electoral norteamericana, no es de extrañar que las posiciones en el Congreso de ese país se radicalizaran con respecto a Colombia: el 8 de junio, la víspera de la captura del jefe del cartel, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado había aprobado un proyecto de ley que afirmaba: "O Colombia profundiza su lucha contra el narcotráfico o enfrentará sanciones económicas estadounidenses". Ahora bien, las razones por las que el gobierno colombiano ha tenido que aceptar el juego de

Washington tienen que ver con su propia legitimidad, pues al no haberse dilucidado enteramente el asunto de los *narcocasetes*, y presentes como están las declaraciones de Joe Toft en el sentido de que Colombia es una narcodemocracia, el gobierno Samper debe demostrar que existe una voluntad política de acabar con el narcotráfico. Este punto es válido para comprender tanto la política de Samper con respecto a los Estados Unidos como frente a Colombia: no se debe olvidar que el proceso 8000 podría involucrar a la campaña presidencial; de allí el interés de Samper en demostrar que su compromiso con la lucha contra el narcotráfico es radical. Para tal fin, se han tomado decisiones políticas que han tenido un efecto positivo en el desmantelamiento del cartel: el nombramiento del general Rosso J. Serrano en la dirección de la Policía Nacional ha significado, en los ocho meses que lleva en el cargo, la destitución de 300 oficiales y más de 2500 suboficiales y agentes de la institución. La conformación del Comando Especial Conjunto, el nombramiento de un nuevo jefe del Bloque de Búsqueda en mayo de 1995 y la cooperación de los agentes de la CIA y la

DEA han sido decisivos en los golpes al cartel. Las enormes recompensas ofrecidas por el gobierno por la delación de los grandes capos (por Miguel Rodríguez se ofrece cerca de 1 millón 800 mil dólares) han tenido como consecuencia directa el estrechamiento de sus grupos de protección (coordinados por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas). Finalmente, los beneficios que sería posible obtener con la política de sometimiento, heredada del gobierno anterior, motivaron a algunos de estos narcotraficantes a entregarse a las autoridades. Pero es en este punto, precisamente, donde el gobierno afronta un primer reto: las experiencias de Iván Urdinola (condenado a una pena irrisoria) y Jorge L. Ochoa (cuya pena se redujo de 8 a 5 años y medio de prisión) generan gran desconfianza en torno a esta nueva ola de capturas y entregas. Esta situación es aprovechada por el gobierno de Estados Unidos, que se niega a reiniciar el intercambio de pruebas judiciales con Colombia, fundamentales para algunos procesos; el fiscal y la Corte Suprema, por su parte, tratan de librarse una batalla jurídica para limitar las rebajas de penas por entrega voluntaria

o buena conducta. Pese a esto, la pena más probable para un gran capo como Gilberto Rodríguez sería de alrededor de 13 años.

Pero más allá de esta preocupación, y de la que remite a la seguridad de los pabellones nacionales (la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de máxima seguridad en 1992 ronda en el gobierno y en la opinión), la cuestión de fondo está en saber los efectos reales que estas capturas tendrán sobre el negocio de las drogas y sobre las relaciones con Estados Unidos. Sobre el primer punto, sería ingenuo suponer que el desmembramiento del cartel dará fin al negocio. Probablemente se producirá una desconcentración del mismo, con menos cabecillas visibles, con una relación de poderes menos jerárquica, en muchas más ciudades; esto dificultará los esfuerzos del gobierno por mermar el negocio y exigirá nuevas formas de afrontarlo. La demonización de los narcotraficantes, políticamente útil para el gobierno, será cada vez más difícil de llevar a cabo por las nuevas condiciones del negocio. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, tratará de encontrar nuevas or-

PIEDRA EN EL ZAPATO

El 5 de junio pasado la DEA hizo pública la acusación de cargos contra 60 personas relacionadas con delitos por narcotráfico, como resultado de la "Operación Piedra Angular" iniciada en 1993. Además de implicar a la cúpula del cartel de Cali, la DEA dio a conocer los nombres de seis abogados norteamericanos al servicio del cartel, tres de ellos ex miembros del Departamento de Justicia (se trata de Michael Abbell, antiguo jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia; Donald Ferguson, ex fiscal federal de Boca Ratón, y John Rosenthal, ex fiscal federal de Nueva York). El caso más delicado es el de Abbell, quien después de ser un funcionario del Departamento de Justicia, ha sido denunciado desde fines de los ochenta por sus actividades como abogado y encubridor de las operaciones del cartel de Cali.

La justicia norteamericana enfrenta la infiltración del narcotráfico muy cerca de sus instituciones -con lo que la corrupción generada por el tráfico de estupefacientes involucra también a su país-. Además de implicar una toma de conciencia de la dimensión del problema, de la manera como se juzgue a estas personas será posible determinar hasta qué punto existe una voluntad de aplicar la justicia en casa propia.

ganizaciones colombianas que invaden a su país de drogas ilegales: el período electoral de 1996 será terreno propicio para ventilar el tema del narcotráfico; el replanteamiento del problema, y por ende de las relaciones con Colombia, están muy lejos aún en el panorama de

la vida política y social (las drogas aparecen cada vez más ligadas a la violencia urbana) de los estadounidenses. La imaginación sociológica de que hablara Mills sigue ausente en los noventa.